

**RESOLUCIONES ADOPTADAS EN EL XIX CONGRESO
(Lisboa, 1996)**

**La noción de Estados amantes de la paz, cincuenta años después de la entrada en vigor
de la Carta de las Naciones Unidas**

Ponente: Juan Antonio CARRILLO SALCEDO (España)

El XIX Congreso del Instituto Hispano-Luso-Americano de Derecho Internacional,

En el marco del Decenio de las Naciones Unidas para el Derecho Internacional y con vistas a la próxima conmemoración del centenario de la Primera Conferencia de la Paz de La Haya,

Convencido de que la paz es un orden que tiende a la justicia y exige el eficiente funcionamiento de los Estados al servicio de los hombres, en un mundo interdependiente como consecuencia de la revolución científico-técnica y la globalización de la economía;

Considerando que la noción de Estados amantes de la paz es clave en el espíritu de la Carta y esencial para la interpretación de los Propósitos y Principios de las Naciones Unidas en este fin de milenio,

PROCLAMA:

1º- Que los Estados amantes de la paz son hoy aquellos que orientan y guían sus comportamientos no sólo en orden a la satisfacción de sus legítimos intereses, en un mundo interdependiente y plural, sino también los de la comunidad internacional y la Humanidad en su conjunto, tanto de las generaciones presentes como venideras.

2º.- Que son expresiones de la paz:

- a) La obligación de aceptar el eficaz funcionamiento de mecanismos de prevención y arreglo pacífico de situaciones y controversias;
- b) El deber de no recurrir unilateralmente a la amenaza o al uso de la fuerza;
- c) La obligación de respetar y hacer respetar los derechos humanos fundamentales;
- d) El deber de cooperar en orden al desarrollo integral de los pueblos, a fin de corregir injustas y crecientes desigualdades;
- e) La obligación de salvaguardar y proteger el medio ambiente;
- f) El deber de contribuir al establecimiento de mecanismos de desarme.

3º.- Que el cumplimiento de estas obligaciones deviene indispensable en orden a la creación de condiciones de paz y solidaridad internacional.

4º.- Que las Organizaciones del sistema de las Naciones Unidas son imprescindibles para la consolidación de una cultura de paz, por lo que los Estados tienen el deber de cumplir estrictamente las obligaciones derivadas de su condición de Miembros, en especial las relativas al pago de sus cuotas.

Para continuar sus esfuerzos en esta materia, el Instituto Hispano-Luso-Americano de Derecho Internacional decide proseguir el estudio de la cuestión con vistas a la publicación, en 1999, de un libro específicamente dedicado al concepto de Estados amantes de la paz, para lo que designa un grupo de trabajo que coordinará el Prof. Dr. Juan Antonio Carrillo Salcedo, de la Universidad de Sevilla (España), miembro del Instituto.

**Universalismo e regionalismo nos direitos humanos:
o papel dos organismos internacionais na consolidação e aperfeiçoamento
dos mecanismos de proteção internacional**

Ponente: Antonio Augusto CANÇADO TRINDADE (Brasil)

El XIX Congreso del Instituto Hispano-Luso-Americano de Derecho Internacional,

1º.- *Confirma* el consenso general que los derechos humanos son Universales, indivisibles y que se ha constituido en una rama del Derecho internacional dotada de su propia especificidad.

2º.- *Recomienda* una progresiva evaluación para mejorar los procedimientos que permiten la más adecuada implementación de la defensa de los derechos del ser humano.

3º.- Consciente que el requisito del previo agotamiento de los recursos internos por el individuo sufre ajustes o adaptaciones en el dominio de la salvaguardia internacional de los derechos humanos a la luz de las necesidades de protección; recomienda que dicho requisito no sea aplicado con la misma rigidez con que lo ha sido en el contexto de la protección diplomática. El énfasis debe desviarse hacia el deber de los Estados de proveer recursos internos eficaces.

4º.- *Insta* a buscar una protección más eficaz de los derechos económicos, sociales y culturales, a la luz de la indivisibilidad de todos los derechos humanos. Estos derechos también son justiciables y requieren métodos de implementación similares a los de los derechos civiles y políticos.

5º.- *Sostiene* que una mejor protección de los derechos de la persona humana en todo momento, se logra con la convergencia de los sistemas del Derecho internacional de los derechos humanos, del Derecho internacional humanitario y del Derecho internacional de los refugiados, cuyos instrumentos deben ser ratificados y puestos en vigor por todos los Estados de la comunidad internacional en su conjunto.

6º.- Finalmente, *afirma* la responsabilidad e incumbencia primaria y necesaria del Estado en la observancia de sus obligaciones de respetar y garantizar los derechos humanos en el ámbito de la jurisdicción interna.

**Iberoamérica y su influencia en la comunidad internacional.
Posibilidades de convertirse en comunidad iberoamericana de naciones
con participación de España, Portugal e Iberoamérica.**

Ponente: Efraín SCHACHT ARISTEGUIETA (Venezuela)

El XIX Congreso del Instituto Hispano-Luso-Americano de Derecho Internacional,

Considerando la existencia de una Comunidad Iberoamericana de Naciones, cuya actual expresión política es la Cumbre de Jefes de Estado, encargada de promover y fortalecer un activo proceso de cooperación entre sus miembros;

Que la misma se sustenta en múltiples y variados factores históricos, culturales y políticos;

Que la Cumbre Iberoamericana aporta -por sí misma- un marco apropiado para profundizar esta relación entre naciones hermanas;

Que la idea de la Comunidad suscita el desafío de la renovación de conceptos unificadores para la entidad iberoamericana;

Por ello, RESUELVE:

Declarar su decidido apoyo a la consolidación de la Comunidad Iberoamericana de Naciones y la integración dentro de ella de otros Estados que, como la República de Filipinas, participan de los mismos valores culturales e históricos;

Expresar que esta idea supone el fortalecimiento de los actuales procesos de integración en diferentes subregiones de Iberoamérica, así como la necesaria armonización y convergencia entre ellos;

Dar a conocer respetuosamente esta Resolución a la próxima Cumbre de Jefes de Estado para su conocimiento.

A extradição e o respectivo sistema português

Ponente: Carlos FERNANDES (Portugal)

O XIX Congresso do Instituto Hispano-Luso-Americano de Direito Internacional,

Considerando o aumento da criminalidade grave e a facilidade actual de deslocação de pessoas do território de um Estado para o de outro;

Considerando os princípios defendidos pelos tratadistas desde Grotius (*aut dedere aut punire*) a Bassiouni (*aut dedere aut judicare*) e consagrados em diferentes instrumentos internacionais, impondo aos Estados a alternativa de extraditar ou de julgar e, eventualmente, punir os criminosos, não contribuindo para a impunidade destes só porque se refugiaram noutro país;

Considerando o carácter dinâmico do Direito internacional e a sua evolução nas últimas décadas, particularmente no que se refere aos direitos humanos, assim como a criação de Tribunais internacionais com competência penal;

Considerando que a extradição, baseada no requerimento do Estado internacionalmente competente, é o mais eficiente meio de cooperação internacional estatal, na luta contra a criminalidade comum grave, evitando a impunidade dos criminosos quando o Estado requerido não tiver competência para os julgar pelo crime por que é pedida a sua extradição;

Considerando que a competência para conceder ou negar a extradição é própria do Estado requerido, e não significa que, em caso de negar a extradição, isto, por si só, é

fundamento de competência internacional para julgar a pessoa requerida, sem prejuízo das regras de competência internacional, especialmente de jurisdição concorrente;

Considerando que o Congresso Internacional de Direito Comparado, reunido na Haia em Agosto de 1932, proferiu a declaração de que “os acordos, em matéria de extradição, devem inspirar-se no princípio de que a concessão da extradição constitui, para o Estado requerido, a execução de um dever resultante da solidariedade internacional na luta contra o crime”;

Considerando que não pode admitir-se a impunidade prática dos criminosos mais graves, que são os que podem ser passíveis de penas de morte ou de prisão perpétua, sob o pretexto da defesa dos direitos humanos, e garantir a punição dos criminosos de menor gravidade, aceitando extraditar estes mas não aqueles;

Considerando que o sistema de garantias, dadas tradicionalmente e de Governo a Governo, são o único meio por enquanto conhecido de harmonizar perfeitamente os imperativos de rejeição das penas extremas de morte e de prisão perpétua ou equivalente com os da punição dos criminosos e da cooperação internacional na luta contra a criminalidade comum grave, e por isso foi consagrado em tratados internacionais, designadamente, no art. 11º da Convenção Europeia de Extradicação;

Considerando a conveniência de reconhecer a existência de certos crimes contra o Direito internacional, como v. gr., genocídio, terrorismo, narcotráfico, tráfico de pessoas, contaminação do meio ambiente, etc., como situações em que a extradição deve operar com base em pedido feito directamente pelas instâncias internacionais competentes, ao abrigo do Direito internacional;

Considerando, finalmente, que o dever de cooperação internacional mútua dos Estados tem precisamente por base fundamentadora evitar que a soberania sirva de cobertura à impunidade;

DECLARA:

1º.- No caso de pedido de extradição em processo penal instrutório no Estado requerente, o Estado requerido deverá quer extraditar quer julgar a pessoa pelo crime por que é pedida a sua extradição;

2º.- No caso de pedido de extradição em processo executório de sentença penal condenatória, quando mediar solicitação do Estado requerente, o Estado requerido deverá quer extraditar quer reconhecer a respectiva sentença, se transitada em julgado, executando-a;

3º.- No caso de extradição em que no Estado requerido não seja tolerada quer a pena de morte quer a de prisão perpétua ou equivalente e estas sejam não só toleradas mas mesmo praticadas no Estado requerente quanto a crimes comuns graves como aqueles por que o extraditando é acusado ou foi condenado, o Estado requerido, em cumprimento do dever de cooperação internacional na luta contra a criminalidade grave, dos princípios de punição dos criminosos e da protecção dos direitos essenciais da pessoa humana, deverá, fazendo valer a ordem pública internacional, acordar com o Estado requerente um sistema de garantias, gerais ou *ad hoc*, na base dos princípios fundamentais do relacionamento estatal internacional -boa fé e *pacta sunt servanda*-, de que, se extraditado, o extraditando não cumprirá nenhuma daquelas penas quanto ao crime ou crimes por que é pedida a sua extradição no caso concreto *sub judice*, harmonizando-se assim os princípios de rejeição das penas extremas de morte ou prisão perpétua com os da punição dos criminosos e da cooperação internacional na luta contra a criminalidade grave, evitando que a soberania

estatal possa servir de cobertura à impunidade, e, por conseguinte, à injustiça, interna e internacionalmente;

4º.- No caso do exercício do asilo (asilo propriamente dito e refúgio territorial), estamos na presença de dois institutos jurídicos diversos a nível da autoridade interveniente e dos fundamentos da sua decisão, sem prejuízo das relações técnico-jurídicas que possam surgir no caso concreto entre os dois institutos;

5º.- Que o pedido de extradição pode promover-se pelas instancias internacionais com competência em matéria penal, caso em que devem aplicar-se critérios similares aos que actuam na extradição entre Estados e ter especialmente em conta os crimes definidos pela comunidade internacional e considerados pelo Direito internacional como crimes internacionais.